



Presidencia
Uruguay



Ministerio
del Interior

Plan Nacional de Seguridad Pública (2025 - 2035)

MESA INTERSECTORIAL: SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Relatoría

01 de octubre de 2025

1. Introducción

La presente relatoría sistematiza los principales aportes de la primera mesa intersectorial sobre sistema de prevención del delito y la violencia, en el marco de los Encuentros por Seguridad del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), realizada el 01 de octubre de 2025 en Montevideo.

El documento se elaboró a partir de la transcripción del encuentro, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, y fue revisado por la Secretaría Técnica del PNSP. Antes de su publicación, el documento fue validado por los participantes, quienes dispusieron de 48 horas para formular observaciones.

2. Características del evento

Título: Mesa intersectorial sobre sistema de prevención del delito y la violencia

Fecha: Miércoles 01 de octubre de 2025

Hora: 9:00 a 13:00

Lugar: Sala Multifunción 2, Torre Ejecutiva Sur (Liniers 1324, Montevideo)

Número de asistentes: 38

Moderación: Emiliano Rojido, coordinador del PNSP

Asistencia técnica: Alexandra Berta, Guzmán Pérez y Sofía Lopes Apesteguy

Instituciones participantes

- Asociación Civil El Abrojo
- Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE)
- Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos de Seguridad (CIPSES)
- Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad (CUES)
- Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU)
- Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)
- Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)
- Defensoría Pública – Poder Judicial
- Dirección Nacional de Educación (DNE) – Ministerio de Educación y Cultura
- Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (FUDES)
- Fiscalía General Nacional (FGN)
- Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)
- Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
- Intendencia Departamental de Maldonado (IDM)

- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
- Ministerio de Salud Pública (MSP)
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)
- Ministerio del Interior (MI)
- Mujeres de Negro Uruguay
- Oficina Nacional de Contralor de Armas (OCNA) – Ministerio del Interior
- OMBIJAM
- OSC Renacer
- Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs)
- Poder Judicial
- Policía Comunitaria – Ministerio del Interior
- Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (UNATRASE)
- Universidad de la República (UdelaR)

Consejo Internacional de Observación y Cooperación¹

- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)
- Organización de los Estados Americanos (OEA)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

3. Desarrollo del Encuentro

3.1 Bienvenida y dinámica de trabajo (9:00 – 9:15)

El moderador comenzó el encuentro destacando algunos datos del “Diagnóstico General de la Criminalidad y la Violencia en Uruguay”, el cronograma de trabajo y los objetivos de la reunión.

3.2 Ronda de presentación (9:15 – 9:30)

Cada participante se identificó, indicando institución representada, nombre y cargo.

3.3 Pregunta disparadora 1 (9:30 – 11:00)

¿Cuáles son los principales desafíos con relación a este tema?
¿Por qué cree que ocurren estos problemas?

Aportes generales:

¹ Las agencias internacionales podrán participar de todos los Encuentros en calidad de observadoras, con un rol no deliberativo, velando por el cumplimiento de las “Reglas del diálogo”.

- **El Abrojo:**

- Señaló que más que prevenir únicamente el delito o la violencia, es necesario construir entornos seguros que permitan el desarrollo pleno de todas las personas, reduciendo brechas de participación y acceso a condiciones de vida dignas, ya que desigualdades materiales y simbólicas limitan la seguridad y el ejercicio pleno de derechos.
- Planteó que la seguridad no puede recaer solo en el Ministerio del Interior; la construcción de comunidades seguras exige participación de todo el Estado. Advirtió que, aunque existen mesas interinstitucionales, faltan actores clave en territorios, y la coordinación muchas veces es formal, limitada por potestades y recursos, lo que reduce la eficacia de la acción estatal.
- Propuso un enfoque integral que involucre educación, salud mental y trabajo en red, con coordinación interministerial, atendiendo causas estructurales de la inseguridad y no solo sus manifestaciones visibles.
- Señaló que el acceso real a la justicia incluye vivir dignamente en una sociedad que garantice derechos, y advirtió que en contextos de vulnerabilidad la ausencia de derechos básicos genera formas de resolución de conflictos incompatibles con la convivencia justa.
- Invitó a reflexionar sobre los niveles de violencia tolerables por la sociedad, especialmente violencias invisibilizadas o naturalizadas, como las domésticas o comunitarias; subrayó que la violencia de género es una expresión grave de esta problemática estructural, afectando a siete u ocho de cada diez mujeres según encuestas nacionales.
- Propuso repensar qué significa construir una sociedad segura, generando condiciones de convivencia y desarrollo humano más allá del control o represión, y concluyó señalando la falta de coherencia entre el discurso de derechos y las prácticas reales, instando a definir la justicia y seguridad deseadas desde valores y compromisos éticos.

- **ASFAVIDE:**

- Destacó como buena práctica la mesa de convivencia del Municipio C, con participación de ASFAVIDE, que permite articular instituciones del territorio y trabajar con adolescentes para mostrar alternativas de vida alejadas de la violencia o el delito.
- Mencionó la mediación comunitaria como herramienta valiosa para generar resultados positivos, fortalecer vínculos sociales y reducir conflictos barriales.

- Subrayó que la falta de prevención no es reciente: desde hace más de 15 años el Estado interviene tarde, cuando los conflictos ya están instalados.
- Señaló que la prevención es prácticamente inexistente y requiere mayor coordinación entre instituciones públicas, ya que la articulación actual es insuficiente, observada directamente en el territorio.
- Enfatizó que la limitada coordinación interinstitucional reduce la capacidad de respuesta del Estado, por lo que es urgente fortalecer la cooperación y planificación conjunta a nivel local.

- **CIPSES:**

- Señaló que alrededor del 40% de los adolescentes presenta dificultades en interacción social, cifra que aumenta en contextos de vulnerabilidad, y que esta etapa de alta plasticidad neurológica ofrece oportunidades clave para la prevención. Propuso intervenir en los ambientes donde se desarrollan, especialmente centros educativos y juveniles, fortaleciendo su sentido de pertenencia institucional y comunitaria, apoyando su desarrollo y construyendo entornos de convivencia seguros. Destacó que estos mismos espacios pueden servir para recoger y sistematizar información sobre factores de riesgo y dinámicas sociales, generando evidencia que fortalezca las estrategias preventivas.

- **CUES:**

- Señaló que el principal desafío es cultural: en Uruguay no se comprende bien la prevención, desaprovechando experiencia internacional; no siempre hacen falta más recursos, sino optimizar los existentes y combinar transformaciones estructurales con medidas inmediatas.
- Destacó que el Ministerio del Interior debe integrar prevención y represión en una misma estrategia, reforzando normas de convivencia, influyendo en la conducta ciudadana y reduciendo la necesidad de represión, favoreciendo la cohesión social.
- Propuso priorizar la prevención situacional y ambiental mediante vigilancia, mantenimiento urbano, limpieza, iluminación, eliminación de puntos ciegos y principios de CPTED, gestionando residuos, controlando grafitis y facilitando la supervisión natural del entorno.
- Señaló que la violencia y el delito muestran señales tempranas; recomendó inteligencia preventiva para identificar indicios (aglomeraciones, consumo de sustancias, patrones recurrentes) y activar respuestas comunitarias o situacionales.

- Indicó que el sector privado es una fuente subutilizada; propuso coordinación público-privada con alertas rápidas y verificación conjunta, combinada con vinculación comunitaria mediante denuncias confidenciales, guardias vecinales y campañas que superen miedo y omertà.
- Sugirió mapear y monitorear hotspots con indicadores claros y métricas de prevención temprana; concluyó que, mientras se mejoran educación y condiciones de vida, es necesario actuar de inmediato con enfoque preventivo para evitar que “cada vez haya más gente presa”.

- **NITEP:**

- Reclamó la necesidad de “humanizar” las políticas públicas, señalando que el Código Civil y Penal por sí solos no bastan; el país carece de una estrategia integral que vincule dimensiones sociales, económicas y de derechos humanos, generando políticas fragmentadas, cortoplacistas y reactivas.
- Advirtió que la falta de coordinación estatal sobrecarga al MIDES, que recibe demandas de vivienda, trabajo y seguridad ajenas a su competencia, y reclamó gobernanza más efectiva, especialmente en zonas periféricas.
- Identificó la ausencia de ciudadanía socioeducativa temprana como un vacío histórico que limita la prevención; propuso presupuestos permanentes en programas para primera infancia, adolescencia y comunidades en riesgo, fortaleciendo vínculos territoriales y filiación cívica.
- Criticó la falta de vivienda social preventiva y presentó el proyecto “Llegar a Casa”, que ofrece viviendas de transición para reinserción estable.
- Subrayó la necesidad de articular trayectorias de vida integrales, superando el patrón educación–trabajo–cárcel, y avanzar hacia justicia restaurativa que asegure continuidad educativa y laboral durante y después de las penas.
- Señaló que la prevención efectiva requiere cambios culturales y operativos simultáneos: campañas públicas, capacitación de seguridad pública y privada, protocolos claros y métricas que midan resultados tempranos.
- Propuso fortalecer capacidades estatales mediante coordinación interinstitucional y cooperación con actores privados, incorporando inteligencia preventiva, vigilancia ambiental, mantenimiento urbano y diseño de espacios seguros para reducir vacíos en territorios críticos.

- Subrayó la importancia de articular seguridad con educación, salud, vivienda y trabajo, involucrando comunidades educativas y actores locales en la identificación de riesgos y promoción de la convivencia.
- Concluyó que cualquier proceso de prevención requiere un presupuesto transversal e intersectorial, institucionalizado en todas las agencias del Estado, que asegure continuidad de trayectorias educativas, laborales y habitacionales, rompiendo el círculo de exclusión y reconstruyendo un desarrollo humano basado en prevención social y derechos humanos.
- Señaló la necesidad de incorporar prevención digital y ciberseguridad en la estrategia general, fortaleciendo la cooperación público-privada, capacidades tecnológicas y formación de personal especializado para responder a incidentes y fraudes informáticos, asegurando trazabilidad y protección de información.

- **Defensoría Pública:**

- Señaló que un gran desafío de la Defensoría Pública es que las personas comprendan qué constituye un delito; la mayoría atendida está en situación de gran vulnerabilidad, muchas veces en situación calle, y no muestra interés en denunciar ni rehabilitar consumos problemáticos, que a menudo perciben como fuente de seguridad para mantenerse alerta, dificultando el abordaje institucional.
- Advirtió que este desconocimiento, producto del subsistema paralelo de normas, dificulta estrategias basadas solo en represión, porque la sanción se percibe como violencia institucional; concluyó que este círculo vicioso refuerza la distancia entre el sistema de justicia y las personas más vulnerables, como “apagar el fuego con fuego”.
- Planteó que esto genera un “subsistema paralelo” de normas y prácticas informales, sostenido por la ausencia del Estado, que entra en conflicto con las normas jurídicas; las personas no ven al delito como un problema compartido, sino como parte de su modo de vida o estrategia de supervivencia.
- Describió que mujeres que intentan ingresar drogas a cárceles son manipuladas vía redes sociales por personas privadas de libertad, combinando promesas de relación —reales o estratégicas— con el incentivo de obtener un porcentaje de las ventas, consolidando una forma de subsistencia validada por el entorno.

- **DNE:**

- Señaló que la mayor vulnerabilidad se encuentra entre niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo formal, sin espacios de referencia ni acompañamiento.
- Explicó que, en entornos vulnerables, muchos adolescentes asisten al liceo más como lugar seguro que para estudiar; los centros educativos deben ser espacios de convivencia y protección, incluso si no ingresan al aula, ya que “es mejor que estén adentro que afuera”.
- Describió que los niños, niñas y adolescentes reclaman espacios para reunirse y convivir, especialmente en el interior del país, donde los lugares son escasos y limitados a cooperativas o iniciativas locales puntuales.
- Subrayó que los recursos públicos y locales deben orientarse racionalmente a crear espacios de convivencia, coordinando Estado y sociedad civil, aprovechando capacidades existentes y fortaleciendo redes comunitarias.
- Consideró que construir entornos seguros y de convivencia positiva previene que adolescentes sean manipulados o reclutados por estructuras delictivas, por lo que la intervención temprana es fundamental.
- Afirmó que el Estado siempre está presente, aunque a veces de forma insuficiente, y que la sociedad civil organizada suele concentrarse en territorios vulnerables, requiriendo apoyo institucional sostenido.
- Propuso profundizar el trabajo conjunto entre instituciones estatales y organizaciones sociales para desarrollar actividades y espacios de encuentro que fortalezcan la convivencia y cohesión comunitaria.
- Cerró señalando que no puede aceptarse territorios inaccesibles para el Estado o la ciudadanía; toda persona tiene derecho a habitar y circular dignamente, lo que debe ser un objetivo central de la acción pública.

- **FUDES:**

- Planteó que el principal desafío es pasar de la discusión a la acción, evitando la politización que paraliza medidas concretas, y destacó la importancia de acuerdos comunes y soluciones compartidas que integren acciones de corto, mediano y largo plazo.

- Subrayó que los espacios intersectoriales son valiosos para reunir visiones diversas y construir entendimientos comunes, siempre que se prioricen y sistematicen los problemas, cuantificando y midiendo su impacto sin deshumanizar, ya que cada número representa a una persona.
- Insistió en empezar por los problemas más grandes o de mayor costo social, avanzando hacia los de menor escala, involucrando a todas las instituciones y actores sociales para fortalecer el trabajo conjunto, incluso si no obtienen beneficio directo.
- Señaló que el control de espacios y la prevención situacional tienen impacto inmediato y pueden ser un punto de partida para acciones concretas. Concluyó que la prevención requiere coherencia y coordinación, integrando medidas estructurales de largo plazo con acciones operativas inmediatas, mediante planificación conjunta y resultados medibles y sostenibles.

- **FGN:**

- Planteó que un gran problema es la naturalización de situaciones críticas como calle, consumo problemático de drogas, salud mental, deserción escolar y realidad carcelaria, donde violencia y analfabetismo se perciben como normales. Recalcó que muchas intervenciones no requieren más recursos, sino cambiar el enfoque y no normalizar estas realidades.
- Reconoció que el Poder Judicial puede participar en prevención, cooperando con otras instituciones y comunidades para explicar la justicia y resolver conflictos antes de que escalen.
- Señaló que la justicia restaurativa y la creación de centros de investigación y resolución temprana de conflictos podrían ofrecer soluciones antes de llegar a instancias judiciales, aunque aún no se han desarrollado plenamente.
- Subrayó la importancia de la educación, no solo formal, sino también para transmitir las consecuencias de ciertas conductas y evitar que se naturalicen en la vida cotidiana.

- **FCEP / PIAs:**

- Planteó que la discusión sobre delito y prevención debe considerarse como una discusión sobre pobreza, ya que las dinámicas delictivas y estrategias preventivas están vinculadas a condiciones socioeconómicas; al hablar de vivienda, cárceles o convivencia territorial se aborda, en realidad, la pobreza estructural.

- Señaló que la primera acción en prevención es promover y proteger derechos, desarrollando políticas públicas basadas en un enfoque de derechos y no solo en reacción ante la infracción.
- Advirtió que la infancia y la adolescencia muestran indicios de vulnerabilidad que facilitan el reclutamiento por redes delictivas, por lo que el sistema educativo y de protección es clave para la prevención temprana.
- Cuestionó la escasez de espacios de participación adolescente fuera de Montevideo y reclamó la expansión de centros juveniles en todo el país para fomentar inclusión y protagonismo.
- Observó que las mesas de convivencia barrial no deberían liderarse desde el Ministerio del Interior; propuso resituar el enfoque hacia lo comunitario y social, con protagonismo de actores institucionales y locales.

• **IELSUR:**

- Celebró las mesas de diálogo interinstitucionales como espacios de democracia y reflexión colectiva, reconociendo que su riqueza en diversidad de actores también dificulta articular y consensuar decisiones. Señaló que los recursos no deben ser el punto de partida, sino definirse tras establecer prioridades claras en la política pública.
- Identificó como desafío urgente la situación penitenciaria, con hacinamiento y condiciones indignas, considerándola un problema humanitario que requiere atención inmediata, valorando propuestas institucionales en esa línea.
- Expresó dudas sobre el enfoque institucional de prevención, que a menudo se limita a un binario prevención–represión, siendo la acción mayormente reactiva. Recordó antecedentes como “Mañanas Complejas” (2003) y señaló que modelos anglosajones no son directamente aplicables, aunque pueden inspirar articulación con redes locales y referentes territoriales.
- Propuso fortalecer la prevención comunitaria como eje central, incorporando organizaciones sociales, asociaciones vecinales y centros educativos, y advirtió sobre el riesgo de que la lógica punitiva desplace el verdadero sentido de la prevención, reduciéndola a un control en lugar de una estrategia integral de fortalecimiento comunitario.

- **IDM:**

- Expresó que el principal reto para la IDM es ingresar en los barrios, donde la población se ha diversificado y hay personas vinculadas al delito; este abordaje debe ser social y comunitario, no solo policial, con asistencia de trabajadores sociales para conocer las realidades locales.
- Señaló que la IDM pasó de centrarse en seguridad física y tecnológica (cámaras y vigilancia) a fomentar la convivencia ciudadana, creando un Departamento de Convivencia Ciudadana para coordinar esfuerzos interinstitucionales.
- Anunció la creación de mesas barriales de convivencia con participación de equipos departamentales y municipales, como espacios permanentes de intercambio y diagnóstico territorial.
- Destacó la necesidad de fortalecer y expandir los centros juveniles, promoviendo la participación de los propios jóvenes en su diseño y gestión para generar espacios de pertenencia y desarrollo.
- Reivindicó el voluntariado ciudadano, especialmente de personas mayores, como herramienta de integración social y beneficio comunitario.
- Señaló que la IDM continuará invirtiendo en tecnología y seguridad, apoyando al Ministerio del Interior en infraestructura de videovigilancia departamental.
- Afirmó que la solución a la seguridad es esencialmente social, con estrategias basadas en conocimiento directo de los barrios, fomento de empleo y educación, y alianzas con organismos nacionales para la inclusión.

- **MVOT:**

- Señaló que la descoordinación del Estado limita el impacto de programas dispersos y sin evaluación; propuso construir una estrategia común con objetivos compartidos entre instituciones y niveles de gobierno, orientando esfuerzos hacia metas colectivas y medibles.
- Destacó que la seguridad pública debe ser responsabilidad compartida y transversal en todas las políticas, aprovechando la capacidad de cada agencia para prevenir, fortalecer la convivencia y articular intervenciones integrales de bienestar y desarrollo comunitario, como la planificación de hábitat con servicios, infraestructura y espacios comunitarios para evitar guetos y promover cohesión social.

- Advirtió que muchos territorios han perdido presencia estatal, generando vacíos ocupados por actores delictivos o informales, y que entre jóvenes se ha naturalizado la aspiración al delito como alternativa al empleo formal; enfatizó la urgencia de recuperar estos espacios mediante presencia institucional y fortalecimiento de redes comunitarias, incluyendo la participación de comunidades educativas.
- Subrayó que organizaciones sociales realizan gran parte del trabajo territorial, pero se sienten solas; propuso mecanismos de apoyo, articulación y financiamiento, reconociéndolas como aliadas estratégicas en reconstrucción del tejido social y prevención de violencia.
- Insistió en que la sostenibilidad de las políticas requiere construcción conjunta con sociedad civil y actores locales, garantizando continuidad, legitimidad y conocimiento del territorio.

- **Mujeres de Negro:**

- Planteó que la violencia y la delincuencia comienzan en la infancia, con niños y niñas que crecen en hogares donde la violencia está naturalizada y la reproducen en la escuela y en sus vínculos sociales.
- Propuso incluir en la educación formal una materia sobre la no violencia desde los primeros años, como se enseña higiene o convivencia básica. Consideró que esta enseñanza debe ser sistemática y transversal, formando a los niños y niñas en empatía, resolución pacífica de conflictos y convivencia.
- Señaló la falta de preparación de policía y operadores judiciales, especialmente en el trato con mujeres y niños, quienes no siempre siguen lineamientos claros ni cuentan con formación adecuada.
- Propuso incorporar actividades deportivas, culturales y de bienestar (como educación física o yoga) en la vida cotidiana de niños, niñas y jóvenes, promoviendo autocontrol, disciplina y convivencia.
- Subrayó que educación, trabajo, cultura y vivienda son pilares esenciales para prevenir la violencia y generar satisfacción vital, ya que la falta de estas condiciones facilita la exclusión y la atracción hacia contextos delictivos o de consumo problemático.
- Recalcó que estos procesos son de largo plazo, pero deben abordarse desde ahora mediante políticas educativas y sociales sostenidas para prevenir la reproducción de la violencia desde la niñez.

- **OMBIJAM:**

- Señaló que el narcotráfico es una emergencia nacional, con redes internacionales y lavado de dinero como motores estructurales de la criminalidad, más allá del narcomenudeo.
- Denunció fronteras abiertas y escáneres en mal estado, lo que facilita el ingreso y tránsito de drogas y dinero ilícito, y pidió su reparación y control urgente.
- Propuso mayor transparencia en el financiamiento de partidos políticos para evitar la infiltración de dinero del narcotráfico en el sistema político.
- Sostuvo que sin abordar estructuralmente el narcotráfico, cualquier esfuerzo social (educación, vivienda, empleo) será insuficiente, ya que la criminalidad seguirá alimentándose de esa base económica.
- Destacó que el sistema carcelario está saturado de personas involucradas en narcomenudeo, evidenciando el fracaso de políticas centradas solo en los eslabones más débiles.
- Relató la propuesta de crear una escuela de educación emocional en cárceles, con 11 materias para formar “pacificadores sociales” y promover la reinserción, que aún no ha recibido autorización institucional.
- Mencionó experiencias exitosas con personas liberadas, mostrando que existen liderazgos y potencial para la reinserción, pero que la burocracia y la falta de respuesta institucional ralentizan estos procesos.
- Insistió en que las soluciones deben ser sostenidas y colaborativas, construyendo oportunidades junto a las personas afectadas con acompañamiento continuo y visión de largo plazo.

- **OSC Renacer:**

- Señaló que existe un gran deber con las adolescencias, ya que muchos se escapan del sistema por falta de herramientas más allá de los recursos económicos.
- Consideró que el mayor desafío es generar red y comunidad entre los adolescentes, fortaleciendo vínculos entre pares y promoviendo mediación y convivencia pacífica en los territorios.
- Describió que los adolescentes enfrentan contextos de violencia y crimen organizado, lo que dificulta sostener procesos educativos y comunitarios.

- Remarcó la importancia de que los adolescentes puedan circular de forma segura en los territorios, garantizando derechos básicos de movilidad, encuentro y pertenencia comunitaria.
- Subrayó la necesidad de espacios seguros donde los adolescentes puedan convivir y desarrollarse emocional y socialmente, ya que actualmente no se les ofrecen condiciones adecuadas.

- **Poder Judicial:**

- Resaltó que en la práctica cotidiana se observan señales claras de vulnerabilidad, especialmente en personas con múltiples carencias, que representan un nicho clave para la prevención.
- Indicó que niños, niñas, adolescentes y mujeres rara vez transgreden por decisión propia, sino que son manipulados, sobre todo en contextos vinculados al narcotráfico.
- Señaló que personas en situación de calle con problemas de salud mental o consumo de sustancias también cometen delitos; cuando son retiradas de espacios públicos sin acompañamiento, reaccionan con violencia, generando conflictos con la policía y terceros. Propuso intervenciones preventivas intersectoriales que incluyan profesionales de salud mental, más allá de la lógica de propiedad privada.
- Advirtió que la mayoría de los casos son cotidianos y sensibles, mientras que el crimen organizado es menos frecuente; destacó que abordar las causas inmediatas permite obtener información valiosa para estrategias preventivas más efectivas.

- **UNATRASE:**

- Planteó la necesidad de crear una red de contención para los trabajadores en primera línea de prevención, especialmente profesionales de seguridad, quienes enfrentan altos niveles de estrés y conflicto emocional, a menudo viviendo en las mismas comunidades donde intervienen. Señaló que esto requiere acompañamiento institucional y psicosocial sostenido, protocolos claros de actuación y líneas de trabajo definidas para evitar decisiones improvisadas o contradictorias.
- Subrayó la importancia de la formación continua, la educación y la comunicación, asegurando que las intervenciones respeten derechos y principios democráticos.
- Concluyó que fortalecer las capacidades institucionales también implica mejorar los entornos comunitarios que rodean a estos profesionales.

- **UDELAR:**

- Señaló que las políticas de seguridad deben concebirse de forma integral, reconociendo que atraviesan múltiples dimensiones de la vida cotidiana (educación, salud, trabajo, territorio y convivencia) y que no pueden abordarse desde un único sector.
- Consideró necesario “desministerializar” la seguridad, involucrando a todas las instituciones del Estado, ya que no se reduce a represión o control del delito, sino que abarca convivencia, acceso a derechos y construcción de comunidad.
- Planteó que prevención y convivencia deben incorporarse en una estrategia clara de política pública, diferenciando los abordajes según fenómenos como violencia de género, narcotráfico o violencia territorial, y superando la tendencia a enfocarse solo en delitos visibles o asociados a la pobreza.
- Cuestionó la definición rígida de “prevención”, recordando que el delito forma parte de secuencias interrelacionadas; propuso mejorar la producción y clasificación de evidencia para diseñar estrategias contextualizadas y avanzar hacia una estrategia interinstitucional común que integre organismos públicos, gobiernos locales y sociedad civil.
- Señaló que el itinerario de acción debe combinar respuestas situacionales e inmediatas con estrategias de mediano y largo plazo, coherentes entre sí; destacó la necesidad de legitimar políticas preventivas, enfatizando participación ciudadana, educación y convivencia como base para sostenibilidad, continuidad y legitimidad social.

3.4 Pausa para café (11:00 - 11:15)

Espacio breve de descanso que permitió a los participantes recuperar energía y mantener intercambios informales.

3.5 Pregunta disparadora 2 (11:15 - 12:45)

¿Dónde hay más oportunidades de intervenir para lograr resultados? ¿Qué iniciativas se han intentado antes y qué aprendimos de ellas?

Aportes generales

- Varias instituciones coincidieron en que el sistema penitenciario puede ser una oportunidad para formar, rehabilitar y preparar a las personas privadas de libertad para el postcarcelario, ya que muchas desean reinsertarse. Actualmente hay alrededor de 16.000 personas privadas de libertad, con períodos que van de seis meses a quince años, ofreciendo una ventana temporal significativa para intervención educativa, laboral y terapéutica; sin embargo, las condiciones actuales no aprovechan ese potencial, ya que faltan programas sistemáticos y se eliminaron incentivos como la redención de pena por estudio o trabajo.
- OMBIJAM señaló la necesidad de ampliar la presencia institucional en cárceles, incorporando más actores públicos y privados. Propuso modificar el esquema de financiamiento de cárceles privadas de “por persona recluida” a “por persona liberada y rehabilitada”, incentivando resultados positivos de reinserción.
- OMBIJAM recordó la experiencia frustrada de una escuela de educación emocional, pensada como espacio de formación en resolución de conflictos y convivencia pacífica, que no fue autorizada pese a contar con estudio de suelo, plan técnico y financiamiento. Esto evidencia falta de coordinación interinstitucional y rigidez administrativa.
- Varias instituciones subrayaron la importancia de fortalecer medidas alternativas al encarcelamiento, especialmente en casos no violentos, avanzando hacia políticas sostenidas de desprisionalización con programas comunitarios de acompañamiento.
- Se mencionaron experiencias como Plan Doble Horizonte (INR-UTU) y Camino a Casa (NITEP), que demostraron impactos positivos en reinserción mediante educación técnica y vivienda de transición, aunque su continuidad fue limitada por falta de presupuesto y coordinación interministerial.
- UdeLaR destacó que la intervención territorial debe priorizar comunidades donde confluyen violencia, deserción educativa y crimen organizado, reforzando los vínculos entre instituciones sociales, educativas y barriales, y proponiendo coproducción de políticas entre Estado, comunidad y academia.

- En lo educativo y social, se insistió en generar espacios de convivencia y participación ciudadana, dentro y fuera de los centros educativos, mencionando iniciativas como “Diálogos por la Convivencia” que transformaron barrios catalogados como “zonas rojas”.
- La Defensoría Pública, FGN y OMBIJAM subrayaron la necesidad de crear pasos previos a la judicialización, como mediación y justicia restaurativa, especialmente en conflictos comunitarios o violencia doméstica, ante la saturación judicial y penitenciaria.
- Se advirtió sobre riesgos asociados a la denuncia, por ejemplo vía 911, que pueden saturar instituciones y exponer a familias vulnerables, destacando la necesidad de proteger a los denunciantes y evitar respuestas automáticas que escalen conflictos.
- En violencia de género, se propuso un abordaje integral, complementando la respuesta penal con mediación, enfoques restaurativos y acompañamiento comunitario.
- Se identificaron oportunidades en la política habitacional, incorporando seguridad y convivencia, considerando la estabilidad de la vivienda como medida de prevención y no solo como política social.
- El MSP remarcó la importancia de atender procesos de crianza y condiciones de estrés familiar como prevención de trayectorias delictivas, destacando que el apoyo temprano reduce el riesgo de violencia y exclusión futura.
- Se señaló que la ubicación geográfica de las cárceles impacta directamente en la reinserción, especialmente para mujeres, dificultando visitas familiares y acompañamiento social.
- En lo estructural, se planteó la necesidad de mejorar controles financieros y aduaneros, y fortalecer fiscalías especializadas en narcotráfico y lavado de activos, ya que prevenir el delito requiere atacar su base económica.
- Se discutió el uso ineficiente de recursos públicos, como seguridad privada para vigilancia de viviendas vacías, que podrían destinarse a prevención social y convivencia comunitaria.

- Se propuso usar canales públicos y tecnologías algorítmicas para mensajes de pertenencia, convivencia y no violencia, apelando a referentes históricos y culturales para reforzar la identidad colectiva.
- Se enfatizó la importancia de sostener aprendizajes previos, estudiando sistemáticamente iniciativas exitosas y replicándolas en nuevos contextos para asegurar continuidad y escala.

3.6 Cierre y próximos pasos (12:45 - 13:00)

El moderador agradeció la participación y el compromiso de los actores presentes, destacando que los aportes recabados serán sistematizados. A su vez indicó que en la semana del 13 de octubre y del 20 de octubre se realizarán mesas temáticas en el marco del Cuarto Encuentro por Seguridad.

4. Anexos

4.1 Lista de participantes

Participantes

Institución	Nombre del Representante
Asociación Civil El Abrojo	Valeria Caggiano
Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE)	María Luisa Martinez
Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos de Seguridad (CIPSES)	María Cervini
Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad (CUES)	Hernando Hernández
Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU)	Daniel Fernández
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)	Daniel Supervielle
Colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP)	Ken Chang
Defensoría Pública – Poder Judicial	María Fernanda Rodríguez Vargas
Dirección Nacional de Educación (DNE) - Ministerio de Educación y Cultura	Grabriela Rak

Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (FUDES)	Daniel Erosa
Fiscalía General Nacional (FGN)	Patricia Marquisá
Fundación Centro de Educación Popular (FCEP)	Paula Aintablian
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)	Carlos Uriarte
Intendencia Departamental de Maldonado (IDM)	Adriana Graziuso
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)	Mercedes Clara
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Marcelo Pereira
Ministerio de Salud Pública (MSP)	José Luis Priore
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT)	Matilde López Schwedt Pablo Cresci
Ministerio del Interior (MI)	Lourdes Gonzalez
Mujeres de Negro Uruguay	Alicia Gutierrez
Oficina Nacional de Contralor de Armas (OCNA) – Ministerio del Interior	Nibia Devila
OMBIJAM	Pamela Martínez
OSC Renacer	Laura López Castro
Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAs)	Paula Aintablian
Poder Judicial	Viviana Galletto
Policía Comunitaria – Ministerio del Interior	Franco Zenons
Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada (UNATRASE)	Darwin Parodi Sosa
Universidad de la República (UdelaR)	Leonel Rivero Luciana Scaraffuni

Consejo Internacional de Observación y Cooperación

Institución	Nombre del Representante
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)	Daniel Castro
Organización de los Estados Americanos (OEA)	Nathalie Castello
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Mariela Solari
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)	Mariana Kiefer

Organización

Institución	Nombre del Representante
Ministerio del Interior	Emiliano Rojido
Ministerio del Interior	Guzmán Pérez
Ministerio del Interior	Alexandra Berta
Ministerio del Interior	Sofía Lopes Apesteguy

4.2 Registro fotográfico







**Presidencia
Uruguay**



**Ministerio
del Interior**